

Santiago, veinte de agosto de dos mil veintiuno.

Vistos:

En estos autos RIT 48-2021 del 7° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, con fecha 4 de junio del año en curso, se dictó sentencia definitiva por la que se condenó a Gustavo Antonio Vega Acuña cédula de identidad N° 11.478.599- 7 a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, multa de 5 unidades tributarias mensuales y accesorias legales como autor del delito de apropiación indebida previsto y sancionado en los artículos 470 N° 1 en relación al artículo 467 N° 1 ambos del Código Penal, ilícito cometido en la comuna de La Florida el 31 de mayo de 2018.

Por no cumplirse los requisitos legales no se otorgó al sentenciado alguna pena sustitutiva y, se dispuso entonces, el cumplimiento efectivo de la condena.

En contra de la referida sentencia el señor defensor penal privado don Reynerio García de la Pastora Zavala dedujo recurso de nulidad el que fundamentó en dos causales, una principal y una subsidiaria. La primera y principal la sustentó en el artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal y, la subsidiaria en la del artículo 374 letra e) del mismo cuerpo legal.

La Excelentísima Corte Suprema por sentencia de treinta de junio del año en curso, señaló, en relación a la causal principal que, de la lectura del libelo se desprendía que el reproche podría dar cuenta de cuestionamientos a la forma de valoración y fundamentación de los antecedentes, lo que podría ser motivo de nulidad del artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, que correspondía además al segundo motivo de nulidad deducido en forma subsidiaria por lo que hizo uso de lo dispuesto en el artículo 383 del Código citado y remitió los antecedentes a esta Corte de Apelaciones para, proceder a revisar la admisibilidad del recurso y fijar audiencia para su conocimiento si procediere.

El recurso fue declarado admisible y se conoció en la audiencia del día 3 de agosto último, oportunidad en que se escuchó los alegatos de ambas partes -Defensor y Ministerio Público- fijándose fecha para la lectura de la sentencia la del día de hoy.

Oídos los intervinientes y considerando:

1º) Que como se adelantó, la defensa dedujo recurso de nulidad por dos causales, sin embargo, la Excelentísima Corte Suprema consideró que



ambos reproches podían quedar comprendidos en cuestionamientos a la forma de valoración y fundamentación de los antecedentes, esto es la causal del artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal.

2°) Que por la primera causal de nulidad, el recurrente luego de referirse a los elementos del tipo penal del delito de apropiación indebida, sostiene que en este ilícito el apoderamiento consiste en un acto de disposición, porque la cosa ya se encuentra en poder del agente y, en la manifestación del ánimo de negarse a restituirla, por cuanto si se reconoce el dominio ajeno y hay un simple retardo en la devolución, no se configura el delito.

Añade que se vislumbran dos criterios errados en la sentencia porque en primer término afirma que el retardo implica el cumplimiento de los elementos de tipicidad del artículo 470 N° 1 del Código Penal, pero además yerra al dar por acreditado el elemento subjetivo, sin otro elemento de prueba que el propio testimonio de la víctima. En la misma línea también reprocha que la participación de su representado se haya establecido con la sola aseveración de la víctima.

Agrega además que se ha justificado por los jueces la existencia del delito de apropiación indebida con el solo dicho de una de las partes, se ha estimado la prueba de una obligación civil, con el solo dicho de una de las partes, se ha confundido la persona del depositante con la del depositario, se ha omitido el elemento subjetivo del tipo penal consistente en el ánimo de apropiación y se ha reconducido éste al solo elemento descriptivo normativo del supuesto apoderamiento.

Que por lo anterior, la defensa postula que el juicio oral y la sentencia dictada son nulos, y solicita se acoja tal pretensión.

3°) Que en cuanto a la causal de nulidad subsidiaria, la parte recurrente sostiene que la sentencia incurre en el motivo absoluto de nulidad del artículo 374 letra e) en relación al artículo 342 letra c) y 297 del Código Procesal Penal. Así explica que el fallo no cumple con las exigencias lógicas para arribar a la conclusión y da pleno valor probatorio al testimonio de la víctima para acreditar la existencia de un contrato previo, la existencia de una obligación de restitución, la existencia de un incumplimiento de obligación, el hecho de haber concurrido la víctima a pedir la restitución de su vehículo, el hecho de la apropiación material por parte del inculpado, el elemento



subjetivo del ánimo de apropiación, la incorporación al patrimonio del imputado de la cosa y relacionar al imputado con el abandono del vehículo en la vía pública.

Explica que todas las circunstancias anteriores se dan por probadas únicamente con el testimonio de la víctima, con infracción a las normas de la lógica. Para ello reproduce los diversos considerandos de la sentencia en que ellas son ponderadas. Dice que las normas de la lógica deductiva llevan necesariamente a una cadena de premisas hacia un resultado, que la falsedad de una de las premisas hará siempre que el resultado sea falso y que en el caso de autos esas cadenas se encuentran violentadas y los espacios son rellenos con presunciones de hipótesis del propio sentenciador violando el principio de no contradicción y el de identidad.

Agrega que la sentencia omite los elementos de juicio que ha tenido en consideración para llegar a sus conclusiones lógicas, tanto es así que en varios considerandos se recurre a la apreciación personal más que al valor de la prueba producida en juicio, verificándose más bien una simple cita de los elementos probatorios, sin que se hayan valorado los medios de prueba en la forma dispuesta en el artículo 297 del Código Procesal Penal.

Finalmente se señala que las normas de la lógica son opuestas a las que señala el tribunal y es por ello que se solicita la nulidad del juicio y de la sentencia ya que la interpretación contraria a derecho influyó en lo dispositivo del fallo porque les hizo creer a los sentenciadores que la interpretación inversa de los principios de lógica y de máximas de la experiencia estaba permitida.

4°) Que como se ve de lo expuesto, lo que la defensa reprocha al fallo es haber dado por acreditados los elementos del tipo penal de la apropiación indebida con la sola declaración de la presunta víctima y es por ello que acusa tanto errores de derecho como errores al valorar la prueba, todo lo cual en su concepto conduce a la necesidad de anular el juicio y la sentencia impugnada.

Al respecto, cabe considerar que si bien por la causal de nulidad principal se acusó errores de derecho e incluso en una parte del escrito de la defensa se hizo mención al artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, al señalar expresamente la causal invocada se sostuvo que correspondía a la de la letra a) del mismo artículo para finalmente la Excelentísima Corte



Suprema derivarla a esta Corte de Apelaciones para su admisibilidad al considerar que de ser efectivos los hechos que fundamentan la causal podría configurarse la del artículo 374 letra e) del mismo Código. En consecuencia, se analizará si es efectivo o no que se ha incurrido en este último motivo de nulidad.

5°) Que el artículo 374 del Código Procesal Penal establece los motivos absolutos de nulidad; y dispone: El juicio y la sentencia serán siempre anulados: e) Cuando, en la sentencia, se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342, letras c), d) o e). Por su parte el artículo 342, que establece el contenido de la sentencia dispone que la sentencia definitiva contendrá: literal c) La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297. Esta última disposición, en lo que interesa al recurso, dispone en su inciso primero, que “Los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados.

6°) Que como tantas veces se ha dicho, se trata entonces de revisar si la sentencia respetó las normas que rigen su dictación, en especial, si valoró los medios de prueba respetando las reglas de la lógica y si al hacerlo estableció los argumentos que permiten fundamentar sus conclusiones. No se trata entonces, de hacer una nueva valoración de la prueba sino solo de revisar la realizada para constatar que se haya hecho como la ley mandata, teniendo en consideración además que, como se sabe, no se trata este de un recurso de apelación donde existe amplitud para revisar nuevamente los hechos como el derecho.

7°) Que la sentencia para fundamentar su decisión condenatoria, detalló primero los medios de prueba con los que se contó, a saber, la declaración de la víctima, de dos funcionarios policiales, de un testigo del ofendido y la prueba documental consistente en el certificado de inscripción y anotación vigente en el Registro Civil, respecto del vehículo de que se trata a nombre de la víctima.

Enseguida, y luego de reproducir las correspondientes declaraciones, sostuvo que *“la apropiación quedó acreditada con el relato de la víctima*



ya reseñado, quien explicó de qué forma llegó a poder del hechor el furgón que usaba a diario en su establecimiento comercial. En sus dichos no se vislumbró motivación alguna que lo llevara a mentir en el juicio y muchos menos a incriminar a una persona inocente. Por el contrario, su versión fue persistente a lo largo de todo el procedimiento, tal como se evidenció de la versión que reprodujo en la audiencia de juicio el funcionario de carabineros que recibió la denuncia del ofendido, mismo relato que también fue consignado en el parte policial incorporado por la fiscal.

Del mismo relato de la víctima se estableció, además, que el sujeto activo recibió la especie en virtud de un título que le generaba la obligación de devolverla, al mediodía del día siguiente en que lo recibió y una vez efectuado el trabajo de reparación del chasis y de los asientos para el cual había sido contratado y que, no obstante haber recibido por anticipado el pago de dicha labor, no solo no efectuó la tarea convenida, sino que tampoco cumplió con la obligación de devolverle el vehículo a su titular.”

Enseguida el fallo se refiere al perjuicio ocasionado con el ilícito y dice que este se encuentra acreditado con las circunstancias en que se encontró el móvil -las que explica- y ello le permite calificar el delito como consumado.

Después el fallo añade que:

“Por último, con su comportamiento, el agente alteró la tenencia legítima que inicialmente tenía sobre la cosa y la transformó en una propiedad de origen ilegítimo al incorporarla unilateral y dolosamente a su patrimonio” Aquí la sentencia se detiene para hacerse cargo del planteamiento de la defensa en cuanto sostenía que no había una conducta dolosa de su defendido sino un incumplimiento de naturaleza civil. Y dice que *“...aun cuando el hechor efectivamente se hubiera ido de la casa en que vivía con su pareja al momento de contratar la reparación del furgón con la víctima, lo cierto es que en vez de informarle lo sucedido a su contraparte, se fue sin avisarle y se llevó consigo el furgón, del que la víctima no volvió a saber hasta que de manera circunstancial y meses después fue encontrado estropeado y abandonado en la vía pública. Así las cosas, la forma en que el supuesto mecánico automotriz por largo tiempo eludió todo contacto con el ofendido, el hecho de que durante ese extenso periodo de tiempo no efectuara trabajo de reparación alguno y que, por el*



contrario, lo dejara botado en la calle y con numerosas piezas menos, ya sea que se las sacara él mismo o bien que con su obrar permitiera que otros sujetos dismantelaran el señalado vehículo, evidencian de manera categórica que su voluntad fue comportarse como señor y dueño del mismo, siendo irrelevante -conforme lo dicho- que nadie dijera haberlo visto usando el furgón.

Luego y siguiendo el razonamiento añade que “el despliegue del hechor excedió con creces el mero incumplimiento de un contrato civil de prestación de un servicio como mecánico. Ello podría entenderse así en la medida que Vega Acuña se hubiera limitado a no efectuar reparación alguna o a hacerla de manera defectuosa, pero en este caso, además, de no reparar el furgón que le había sido entregado en virtud de un título que le obligaba a restituirlo al día siguiente, sin entregarle explicación alguna a su titular se lo quedó para sí y lo ocultó de su dueño, tal como él mismo se escondió a fin de evitar encontrarse con su vecino que lo buscó varias veces en su domicilio (o en el que fuera tal, si se acoge la versión de que el individuo ya no vivía ahí por problemas con su pareja). Así pasaron largos meses, hasta que de manera fortuita la policía lo encontró abandonado y dismantelado en la vía pública y si bien lo hallaron a unas ocho cuadras del domicilio de la víctima, no era responsabilidad de Olea Bustos salir recorrer las calles en búsqueda de su automóvil, sino que correspondía al mecánico habérselo devuelto en tiempo y forma, lo que no hizo. Por lo demás, tampoco hay evidencias de que el furgón hubiera estado siempre en el mismo lugar en el que fue encontrado, más aún si se considera que vehículos policiales a diario efectúan patrullajes por distintos lugares de la comunidad, sin que en forma previa al día del hallazgo advirtieran su presencia.”

En cuanto a la participación del encausado en el ilícito de que se trata, la sentencia en el considerando octavo sostuvo que: “Que la participación del encausado como autor del delito que nos ocupa resultó acreditada con los dichos de la víctima, quien señaló a dicho sujeto como aquel individuo con quien contrató y a quien le pagó por la reparación de su automóvil. La misma sindicación le efectuó el ofendido al carabinero Fuentes Riquelme, que a pocos días de ocurrido el hecho recibió la denuncia por la apropiación indebida.



Tal incriminación fue refrendada por el carabinero Rocco Quidenao, quien tras encontrar el vehículo abandonado en la vía pública se entrevistó con el encausado, quien le dijo que había recibido el furgón para repararlo y que lo había dejado afuera de la casa de su suegra, sin darle mayores explicaciones.”.

8°) Que de lo reproducido previamente, es posible advertir que los reproches que la defensa formula al fallo no son efectivos.

En efecto, no se trata que la sentencia solo haya acudido a la declaración de la víctima para dar por acreditados los presupuestos del delito de apropiación indebida, ya que también se acudió a las circunstancias constatadas por la policía de hallarse el vehículo desmantelado en la vía pública meses después de que el ofendido denunció su apropiación y que al haberse contactado con el imputado sobre estos hechos este se limitó a reconocer que lo había recibido para reparación, que lo había dejado fuera de la casa de su suegra sin dar mayores explicaciones.

Es decir, el tribunal analiza los antecedentes y verifica que tanto la víctima como el imputado –por los dichos ante un funcionario policial– ratificados por este funcionario en juicio dan cuenta que el vehículo fue entregado para reparación. En ese escenario el tribunal establece que dicha reparación no se verificó, que por el contrario se denunció su apropiación y que el vehículo aparece meses después desmantelado, sin que el imputado entregue mayores antecedentes.

Por lo tanto los argumentos del tribunal para dar credibilidad al relato de la víctima son relevantes porque a través de ellos explica la razón para sostener que dicha prueba testifical alcanza el estándar necesario para adquirir la convicción de condena. En la misma línea, el tribunal también enjuicia la conducta del imputado de no dar mayores antecedentes ni explicaciones ante la Policía sobre las razones en que se encontró el vehículo limitándose a decir que lo recibió para reparación, tampoco hay respuesta a la tardanza del encargo ni del por qué nunca más dio alguna respuesta o explicación al denunciante, cambiándose incluso del lugar donde vivía y donde había quedado el vehículo y ocultándose del afectado pues nunca más logró comunicarse con él.

9°) Que es evidente que cuando se analiza la declaración de un



testigo que a la vez es también víctima del delito que se investiga, el tribunal debe cerciorarse que sus dichos puedan ser dignos de fe, dado que quien declara está afectado personalmente con el hecho y dentro de esa óptica se pondera su credibilidad, lo que la sentencia hizo constatando que existía un relato que era mantenido en el tiempo pero que además aparecía corroborado con el hecho que un policía al contactar al imputado sostuvo que este reconoció que recibió el móvil para repararlo y que lo dejó en la casa de su suegra no dando mayores explicaciones de lo acontecido, explicaciones que tampoco entregó a los funcionarios que estuvieron a cargo de la orden de investigar impartida ante la denuncia de la víctima y que tampoco dio al tribunal prefiriendo guardar silencio. Es por ello que la versión del imputado no solo tiene coherencia interna sino también externa con los antecedentes allegados al juicio.

10°) Que la sentencia se adecue a las reglas de la lógica en la ponderación que se hace de la prueba, significa que dicho razonamiento respete ni más ni menos que el sentido común y es por ello que revisando la valoración que hicieron los jueces no se aprecia en ello un actuar contrario a dicho sentido.

11°) Que además se debe tener presente que la postura de la defensa en el juicio fue la de levantar un simple incumplimiento civil y que ahora en el recurso postula que un retardo en la devolución no conlleva un dolo de apropiarse, sin embargo, la sentencia se hace cargo de tales planteamientos –desechándolos- pues analiza el comportamiento del inculpado - recibir el móvil, no repararlo, no devolverlo en meses, eludir todo contacto con la víctima y no mantener el vehículo en el lugar donde se conocía que vivía y trabajaba- todo lo cual permitió a los sentenciadores considerar que se comportó con ánimo de señor y dueño de la especie, a lo que se aúna que los problemas de pareja que pudo tener y que podrían justificar su salida del lugar donde vivía tampoco fueron explicados a la víctima. Por eso los jueces consideraron que no se trataba de un simple incumplimiento contractual, pues el imputado se comportó como hace quien es dueño de una cosa, llevándosela donde se quiera sin dar explicaciones a nadie sobre ella pudiendo solo recuperarla ante la circunstancia de hallazgo eventual que hace la policía en la vía pública y no por la entrega o devolución del imputado.



12°) Que de esta forma cabe desechar que la sentencia incurra en el motivo absoluto de nulidad a que se refiere el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, observándose que se dio cumplimiento a cabalidad con los principios y reglas que rigen la valoración de la prueba.

Así no se ha quebrantado el principio de no contradicción y de identidad que el recurso se limita a denunciar como vulnerados, pues no se aprecia que los jueces hayan establecido hechos que pudieran ser y no ser a la vez, ya que solo establecieron la apropiación indebida y no el incumplimiento contractual o el simple retardo que postulaba la defensa, y respecto del principio de identidad -que no se desarrolla en el recurso- tampoco se advierte cómo podría verse este vulnerado, menos si no se explica por la defensa cómo entiende que ello se produce por lo que no cabe conjeturar al respecto.

13°) Que por lo razonado, cabe desestimar los argumentos invocados por la defensa tanto a propósito de la causal principal como la subsidiaria de nulidad, por cuanto no es cierto que la sentencia incurra en el motivo absoluto de nulidad denunciado.

14°) Con todo, si bien en el recurso en lo principal se intentó cuestionar la tipificación que se hizo de los hechos probados, ello no es abordable por la causal en estudio del artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, pues dicha causal implica analizar si los hechos probados fueron establecidos correctamente, es decir, conlleva la modificación o cuestionamiento de estos lo que es ajeno en un análisis de infracción de ley porque ello es motivo de una causal de nulidad distinta -373 letra b)- y eso conduce también, además de lo ya dicho, a desestimar los argumentos de la causal de nulidad principal.

15°) Que por todo lo indicado el recurso en estudio no puede prosperar y será desestimado.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 384 del Código Procesal Penal **se rechaza el recurso de nulidad** por ambas causales deducido por el abogado señor Reynerio García de la Pastora Zavala, en contra de la sentencia dictada por el 7° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago el 4 de junio del año dos mil veintiuno en la causa RIT 48-2021.

Regístrese y comuníquese.

Redactó la Ministra Mireya López Miranda.



Rol N° 2795-2021

Pronunciada por la **Octava Sala**, integrada por la Ministro señora Mireya López Miranda, quien no firma por encontrarse haciendo uso de licencia médica e integrada por el Ministro (S) señor Carlos Iturra Lizana y el Abogado Integrante señor Francisco Javier Ovalle Aldunate.



Pronunciado por la Octava Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Suplente Carlos J. Iturra L. y Abogado Integrante Francisco Javier Ovalle A. Santiago, veinte de agosto de dos mil veintiuno.

En Santiago, a veinte de agosto de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

